

Bolivia: movimientos sociales, nacionalización y Asamblea Constituyente

L. Pablo Cuba Rojas*

** Docente Investigador
del Instituto
de Estudios Sociales
y Económicos (IESE)
de la Universidad Mayor
de San Simón,
Cochabamba, Bolivia.
Miembro
de la Asamblea
del Centro de Estudios
de la Realidad Económica
y Social (CERES),
Bolivia.*

Introducción

Los acontecimientos políticos que se desarrollaron en Bolivia en los últimos cinco años generaron un conjunto de interrogantes frente al surgimiento de nuevos y complejos problemas en las esferas política, cultural, social y económica. El proceso actual ha dado lugar a la presencia de nuevos actores de la sociedad civil que buscan encaminar sus propuestas y demandas desde una visión más constructiva para lograr una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable.

Es importante recordar que las tensiones políticas que derivaron en un nuevo proceso electoral realizado en diciembre de 2005 tuvieron como resultado la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) por más de 53%. Es en ese nuevo contexto que se ven espacios de participación inspirados no sólo por reivindicaciones económicas sino en la posibilidad de una participación más activa en la construcción de un nuevo orden social a través de la Asamblea Constituyente.

[AÑO VII Nº 19 ENERO-ABRIL 2006]

OSAL 55

El resultado de las elecciones, que abarcó no solamente a presidente y vicepresidente, sino que incluyó al Congreso Nacional y a los prefectos, ha generado un nuevo escenario para definir mejor en qué marcos institucionales se plantean otros temas que influirán en la gestión pública nacional, regional y municipal, en el proceso de descentralización, y en los procesos de desarrollo local con participación ciudadana.

Desde antes de las elecciones de 2005 en Bolivia, las expectativas crecieron más rápidamente que la economía y que los recursos para satisfacerlas. Ello se debió en parte a la nueva dinámica de circulación de ideas e imágenes en el mundo, que facilita y estimula la comparación entre unas y otras realidades agudizando la percepción de las desigualdades, y que por tanto ha puesto sobre la mesa los intereses de los grupos de poder y de los movimientos sociales.

Los hombres y mujeres en el gobierno de Evo Morales

El nuevo gobierno, encabezado por el líder sindical cocalero Evo Morales, en su discurso de posesión hizo énfasis en combatir la corrupción y cumplir con la agenda de octubre¹. La composición de su gabinete se conformó con líderes locales ligados a la guerra del gas y del agua, así como con mujeres líderes de movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos de los más pobres y vulnerables de la sociedad boliviana.

Así, la actual ministra de Justicia proviene de un movimiento de reivindicación de las empleadas domésticas, que durante más de cinco años encabezaron movilizaciones para que el parlamento boliviano aprobara una ley que permita reconocer los derechos laborales de ese significativo sector. En el Ministerio de Desarrollo Económico, importante cartera de gobierno y muy vinculada con el sector micro empresarial, se posesionó a una líder local con amplia trayectoria sindical, sobre todo a nivel de las organizaciones sociales productivas del sur de Bolivia (municipios de Tarija).

El Ministerio de Hidrocarburos está bajo la responsabilidad de un ex-parlamentario boliviano vinculado a un desaparecido partido populista, que en la década del noventa se convirtió en uno de los partidos-asociación del espectro nacional, como diría Bourdieu (2001), por el carácter limitado y parcial de sus objetivos y por la composición social fuertemente diversificada de su clientela (hecha de electores y no de militantes). En su condición de parlamentario y periodista criticó permanentemente al modelo neoliberal, y sobre todo a los acuerdos firmados en el marco de la capitalización, principalmente en el sector de hidrocarburos. Por otra parte, en el Ministerio de Servicios Básicos se designó a uno de los líderes vecinales de la ciudad de El Alto, donde se desarrollaron los principales conflictos sociales.



© Nick Buxton

El resto del gabinete está conformado por otros representantes del sector público y privado más vinculados a organizaciones de productores medianos y pequeños. Además, el gobierno cuenta con el apoyo de representantes de organizaciones sociales del trópico de Cochabamba, hombres y mujeres de amplia trayectoria sindical, y en el altiplano se encuentran dirigentes locales que junto a otras organizaciones campesinas y mineras han conformado un Alto Mando del Pueblo, que vendría a reemplazar desde el punto de vista funcional a la principal organización de los trabajadores de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB).

La nacionalización y la defensa de los recursos naturales

La nacionalización de los hidrocarburos aprobada, el mismo día en que se celebraba el Día Internacional de los Trabajadores, tomó por sorpresa a la población por la forma tan reservada y cautelosa con que se trabajó su decreto. Esta medida política señala que en

base al referéndum vinculante del 18 de julio de 2004, y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país, se recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos, y las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la producción de hidrocarburos. A su vez, YPFB, en nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización².

Este decreto, que cambia las reglas de juego con las empresas petroleras, plantea un plazo de negociación para la renovación de nuevos contratos y define el papel de la empresa estatal en la explotación del principal recurso natural de exportación con que cuenta Bolivia, por lo que Evo Morales señalaba en su discurso:

Si hemos llegado a donde hemos llegado como presidente, ministros, parlamentarios que vienen fundamentalmente de los pueblos indígenas originarios, queremos decirles, no venimos con la venganza, llegamos acá para la esperanza del pueblo boliviano y la propiedad de los hidrocarburos, del gas natural que pasan a partir de este momento a manos del Estado boliviano. Bajo el control del pueblo boliviano, es la solución a los problemas económicos, a los problemas sociales de nuestro país (*Los Tiempos*, 2006).

Con esta medida, el gobierno de Morales ha sentado la base de su modelo económico y el papel del Estado, que ha de tener una alta participación en la economía boliviana y en sus relaciones con los países de la región, dando los primeros pasos frente al modelo económico de corte neoliberal que estuvo vigente por más de veinte años. De ahí que Morales consideró a ese acto como un reconocimiento a los trabajadores de Bolivia:

Al pueblo de Bolivia, en este día también histórico, primero de mayo, un gobierno popular, un gobierno originario, un gobierno sobre todo que viene de tantas luchas indígenas originarias de más de 500 años, qué podíamos hacer al margen de la libre contratación, al margen del salario, el mejor regalo para los trabajadores del campo y la ciudad, para los profesionales e intelectuales que trabajan en nuestro país, el mejor regalo a los trabajadores es la nacionalización de nuestros recursos naturales, los hidrocarburos (*Los Tiempos*, 2006).

La reacción mundial fue inmediata frente a ese decreto de nacionalización pero los que se consideraban más afectados por esa medida gubernamental fueron las empresas

“La reacción mundial fue inmediata frente a ese decreto de nacionalización pero los que se consideraban más afectados por esa medida gubernamental fueron las empresas multinacionales Repsol y Petrobras, quienes recurrieron inmediatamente a sus gobiernos en España y Brasil”

multinacionales Repsol y Petrobras, quienes recurrieron inmediatamente a sus gobiernos en España y Brasil. Sin embargo, también hubo cautela política en las declaraciones de los representantes de ambos países. Pasadas la sorpresa y las primeras reacciones frente a la medida tomada por el gobierno de Morales, a los dos días, los presidentes de Bolivia, Argentina y Brasil, involucrados en forma directa en el negocio del gas, junto con el presidente de Venezuela, quien enfatizó la importancia de la solidaridad con Bolivia y ponderó la importancia del acuerdo energético latinoamericano, asistieron a un encuentro internacional realizado en una población fronteriza de Brasil donde acordaron respetar la decisión soberana de Bolivia y negociar en forma bilateral el precio del gas. En el caso del gobierno de España, la reacción fue parecida aunque duramente criticada por la derecha de dicho país.

La política social del Gobierno de Morales

En este corto período de gobierno, 100 días, las acciones emprendidas en el campo social se basaron fundamentalmente en plantear propuestas de empleo de emergencia a través del programa social denominado “Pro-país”, que apunta a generar un empleo más productivo con apoyo de la cooperación internacional y se vislumbra como una acción directa que busca la superación de la pobreza, la expansión de los servicios públicos y la equidad social.

Por otra parte, a través de una resolución gubernamental se incrementó el salario mínimo vital y se eliminó la libre contratación vigente en Bolivia bajo la política neoliberal. El resultado de esa acción ha provocado una reacción del sector empresarial, que señaló que el decreto que reconoce las indemnizaciones por despidos injustos y obliga a la contratación con el salario mínimo afectaría la competitividad de las empresas. Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados por diversas instituciones de investigación social, se ha comprobado que la libre contratación en Bolivia tuvo un efecto más negativo que positivo: durante

muchos años afectó sobre todo a los grupos de bajos ingresos, que se vieron obligados a generar estrategias de vida en el sector informal, donde las actividades que realizan generan bajos ingresos. Sin embargo, por otra parte también es importante reconocer que en las áreas urbanas de Bolivia los ingresos promedio de las distintas categorías ocupacionales han subido de una manera relativamente significativa, sobre todo en el sector formal de la economía. A partir de la nacionalización de los hidrocarburos y de la eliminación de la libre contratación se establecen las bases para un nuevo modelo económico y social en Bolivia.

La Asamblea Constituyente

Una de las principales demandas de las movilizaciones que impulsaron la guerra de febrero (2002) y la guerra del gas (octubre de 2003) tiene que ver con la convocatoria para una Asamblea Constituyente que permita modificar la actual constitución política del Estado. La acción política para llamar a una constituyente es producto de diversas movilizaciones y numerosas marchas que se realizaron durante estos últimos años en Bolivia. Agrupaciones como el Movimiento Sin Tierra, los cocaleros del Chapare y los Yungas, los mineros cooperativistas de Oruro y Potosí, y finalmente las Juntas Vecinales del Alto de La Paz, estuvieron entre las principales fuerzas sociales impulsoras de la Asamblea Constituyente además de los movimientos indígenas propiamente tales, sobre todo de aquellas tierras comunitarias de origen (TCO) que demandan a través de la Asamblea Constituyente un mejor ordenamiento territorial conforme a sus “usos y costumbres”³.

El último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2004) se opuso sistemáticamente a convocar a una Asamblea Constituyente y trató de reducir a los movimientos sociales en simples agregados o desmovilizarlos por medio de la represión. Esta situación generó reacciones diversas entre la población e importantes conductas simbólicas que a la postre fueron las principales banderas de lucha de los movimientos sociales en Bolivia que se expresó en un complejo escenario social con violentas movilizaciones sociales y bloqueos de caminos en todo el país. El orden social y político fue cuestionado y se obligó a renunciar a dos presidentes constitucionales en menos de dos años.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente pasa a convertirse en un espacio importante en la redefinición de la sociedad boliviana para los próximos veinte o treinta años. El propio gobierno de Evo Morales reconoce la importancia política de ese escenario, motivo por el cual se ha asegurado de que los postulantes a constituyentes sean elegidos en ampliados campesinos, mineros y en otros espacios sindicales para asegurar el control social de sus representantes locales o regionales⁴.



© Nick Buxton

Los temas centrales son diversos y complejos, pero sólo los tres partidos más votados en las elecciones de diciembre –MAS, PODEMOS y UN⁵– recibirán recursos financieros para sus campañas dirigidas a elegir a los constituyentes, lo que les da mayor ventaja sobre otros partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Adicionalmente, el presidente Morales apuesta al éxito de los resultados de la Asamblea Constituyente para consolidar su liderazgo y generar un proyecto político de más largo aliento.

Las presiones vinieron de los sectores de derecha y de un sector del periodismo nacional, por considerar que la campaña para elegir a los representantes para la Constituyente liderada por el partido de gobierno se realizaba con recursos del Estado, y que Morales cumplía más un rol de líder sindical olvidando su papel como mandatario. A los pocos días de esas críticas, el gobierno de Morales daba a conocer al país el decreto de nacionalización de los hidrocarburos.

Conclusión

En el futuro inmediato se vislumbra un complejo proceso de gobernabilidad que, si bien está marcado por el optimismo propio del cambio, no deja de tener grados de incerti-

dumbre. Con la nacionalización del petróleo y el nuevo rol de YPFB en la administración de los hidrocarburos el desafío es garantizar un flujo de inversiones extranjeras para el sector con las nuevas reglas establecidas por la nacionalización, además de implementar mecanismos más transparentes para beneficiar a los más desfavorecidos económica y socialmente. Es importante que el gobierno establezca niveles de negociación con diferentes sectores de la sociedad y en particular con aquellas movilizaciones que son estrictamente reivindicativas.

De la misma manera se visualiza que la reforma política, social y económica sea conducida a través de la Asamblea Constituyente⁶ para adoptar una nueva Constitución Política del Estado. El pueblo boliviano exige una constitución que le garantice su soberanía, sus derechos, sus riquezas, su prosperidad y su futuro. Sin embargo, su aprobación e implementación se dará en nuevos escenarios si se aprueban las Autonomías Regionales⁷. Adicionalmente, constituye un gran desafío para el gobierno de Evo Morales el consolidar las acciones iniciadas en estos cien días de gobierno generando las bases para el desarrollo futuro de la economía nacional, al igual que aquellas referidas al control de la explotación y comercialización de los recursos naturales, la integración económica regional, y la generación y el mejoramiento de los empleos.

Es indudable que en los años anteriores estos avances no fueron suficientes, y que los desafíos que el país tiene pendientes para resolver los problemas de la pobreza y la exclusión social son todavía enormes, sobre todo los que afectan a las poblaciones y comunidades rurales e indígenas. La solución a las demandas planteadas debe buscarse en el cambio en los paradigmas institucionales que definen la noción de progreso para las personas y los grupos sociales.

En los próximos meses el gobierno de Morales debe promover una democracia con equidad social para garantizar la participación de la población en el sentido del ejercicio

“El pueblo boliviano exige una constitución que le garantice su soberanía, sus derechos, sus riquezas, su prosperidad y su futuro. Sin embargo, su aprobación e implementación se dará en nuevos escenarios si se aprueban las Autonomías Regionales”

de derechos públicos y la generación de una cultura de convivencia que promueva la tolerancia en la diferencia, la efectiva participación en los asuntos públicos, y el desarrollo de los mecanismos propios de la sociedad civil para fortalecer los sentidos de comunidad, solidaridad y responsabilidad. Morales ha dado los primeros pasos, pero todavía tiene mucho que recorrer para cumplir con sus compromisos electorales y generar un proceso de responsabilidad social y política sobre los cambios que se están produciendo.

Bibliografía

Bourdieu, Pierre 2001 *El campo Político* (La Paz: Plural).

Corte Nacional Electoral 2006 *Asamblea Constituyente y referéndum nacional vinculante* (La Paz).

Seoane, José (comp.) 2003 *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Laserna, Roberto 2005 *Ciudades y Pobreza* (Cochabamba: IESE/Plural).

Secretariado Rural 2005 *Territorios indígenas, autonomías y Asamblea Constituyente* (La Paz).

Los Tiempos 2006 "Documentos especiales sobre la nacionalización de los hidrocarburos" (Cochabamba) 3 de mayo.

Notas

1 Producto de la revuelta popular de octubre de 2004 que demanda principalmente la nacionalización, recuperación total e industrialización de los hidrocarburos, la realización de la Asamblea Constituyente, y el juicio de responsabilidades contra el ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada.

2 DS 28701 dictado el 1 de mayo de 2006.

3 El término "usos y costumbres" se refiere a los acuerdos comunitarios para la administración de los sistemas de agua y tierra establecidos en un determinado territorio y es muy aplicado en el área rural de Bolivia desde antes de la colonia como criterio de institucionalidad local.

4 El número de asambleístas es de 255 asambleístas. 210 son candidatos uninominales en 70 circunscripciones aprobadas por la Corte Nacional Electoral. Los otros 45 son plurinominales. Los ciudadanos votarán, el 2 de julio, por representantes a la Asamblea Constituyente.

5 PODEMOS es la agrupación ciudadana conformada por el ex presidente Jorge Quiroga que expresa los intereses de la derecha boliviana. Cuenta actualmente con casi la mitad de los representantes en el senado nacional. La mayor parte de sus representantes legislativos proviene de los partidos tradicionales, principalmente de Acción Democrática Nacional (ADN), fundado por el ex presidente Hugo Banzer. El partido Unidad Nacional (UN) es

liderado por el empresario boliviano Samuel Doria Medina, que busca representar al sector productivo, principalmente a los pequeños y medianos empresarios.

6 La Asamblea Constituyente prevista para agosto de 2006 considera la participación de más de 144 constituyentes. Está previsto reconfigurar el escenario económico, jurídico y social de Bolivia. Se espera que los resultados de sus deliberaciones sean presentados en la siguiente legislatura, en agosto de 2007.

7 La idea de impulsar las autonomías regionales proviene de la propuesta del Comité Cívico de Santa Cruz para lograr una reconfiguración descentralizada desde la perspectiva de los grupos de poder regional. De ahí que hubiera sido apoyada sobre todo por grupos económicos vinculados a las empresas petroleras y grandes productores de soya y ganaderos.